1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ORDEN de 22 de junio de 2001, por la que se autoriza la puesta en operación del servicio de atención de llamadas de urgencias y emergencias 112.

La Decisión 91/396/CEE, de 29 de julio, del Consejo de las Comunidades Europeas estableció el número telefónico «112» como teléfono único de llamada de urgencia europea e insta a los Estados miembros a su introducción en sus respectivas redes telefónicas públicas.

Por lo que respecta al Estado Español, el Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso, mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número «112», atribuye a las Comunidades Autónomas la prestación de dicho servicio al objeto de permitir requerir la asistencia de los servicios públicos competentes en materia de atención de urgencias sanitarias, de extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y, por la posible necesidad de coordinar los anteriores, de protección civil, cualquiera que sea la Administración pública de la que dependan.

El Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería de Gobernación, atribuye a ésta el desarrollo general, la coordinación y el control de la ejecución de la política del Consejo de Gobierno en relación, entre otras, con las competencias en materia de Protección Civil y Seguridad, Policía Andaluza, y coordinación de Policías Locales. En particular, corresponde a la Dirección General de Política Interior, conforme lo dispuesto en el artículo 7.c) del citado Decreto 138/2000, la organización y dirección del Centro de Coordinación Operativo.

El servicio que viene a prestarse mediante el teléfono único de urgencias y emergencias «112» significa un importante avance en el modelo de gestión integral de las emergencias en Andalucía, de modo que facilita el acceso de los ciudadanos, así como una respuesta más eficaz de los recursos públicos y una mejor coordinación de los mismos.

La iniciativa europea para la puesta en marcha de un teléfono único de urgencias y emergencias tiene una doble proyección: De una parte, favorecen la coordinación entre los distintos servicios y organismos que intervienen en las emergencias y de otra, habilitar un número telefónico de fácil accesibilidad a la población.

En lo que corresponde al primer aspecto, desde el año 1994 la Consejería de Gobernación inicia el desarrollo de los Centros de Coordinación de Emergencia, como instrumento de coordinación para integrar la respuesta a las emergencias por parte de las Administraciones Públicas y servicios intervinientes. En el año 1999 se finaliza la instalación de estos centros en todas y cada una de las provincias de Andalucía.

A partir de ello, y en relación al segundo aspecto antes indicado, se proyecta por la Consejería de Gobernación la adecuación tecnológica y operativa de los referidos centros para la incorporación del acceso telefónico a través del número «112» como servicio público.

Por lo tanto en virtud de cuanto antecede, de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.

1. Por parte de los órganos competentes de la Consejería de Gobernación, se procederá a la puesta en operación del

servicio de atención de urgencias y emergencias a través del número único europeo «112», al objeto de ofrecer a los ciudadanos y entidades públicas y privadas el acceso a los servicios públicos competentes en materia de asistencia sanitaria de urgencia, de extinción de incendio y salvamento, de seguridad ciudadana y protección civil, cualquiera que sea la Administración Pública de la que dependan. En este sentido, el sistema no comprende la prestación material de la asistencia requerida.

2. La implantación del servicio se realizará progresivamente, hasta alcanzar la totalidad del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en función de los correspondientes créditos presupuestarios, desarrollo de las infraestructuras y equipamientos, así como de la celebración de los convenios de colaboración a que alude el artículo 3 de la presente Orden.

Artículo 2. Puesta en operación del servicio.

1. En relación con la puesta en operación del servicio, se autoriza al Director General de Política Interior a la ordenación y dirección de los medios y recursos dependientes de la Consejería de Gobernación, que tengan encomendada la puesta en operación del teléfono de atención de urgencias y emergencias «112» en Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del presente artículo.

2. Se autoriza a los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía a la ordenación y dirección de aquellas actuaciones relativas a la puesta en operación del servicio de atención de urgencias y emergencias «112» que afecten exclusivamente a sus respectivos ámbitos territoriales.

3. La efectiva puesta en operación del servicio en cada uno de los correspondientes ámbitos territoriales que no excedan al de la provincia se dispondrá en cada caso, mediante Resolución del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, de conformidad con la planificación previa aprobada por la Dirección General de Política Interior.

Artículo 3. Convenios de colaboración.

1. Se podrán celebrar convenios de colaboración con las personas físicas o jurídicas públicas o privadas titulares de los servicios de urgencia y emergencia, de conformidad con el ordenamiento jurídico, a los efectos de establecer procedimientos y normas de atención y coordinación.

2. Corresponde al Director General de Política Interior proponer la celebración de los convenios de colaboración a que se alude en el apartado anterior, así como determinar el contenido mínimo a que deberán ajustarse los mismos.

3. Se delega en los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía la facultad de celebrar los convenios de colaboración previstos en el apartado 1 del presente artículo, cuyo ámbito territorial de aplicación no exceda al de la provincia.

4. El titular de la Consejería podrá recabar en todo momento celebración de cualquier convenio objeto de delegación, la cual, no obstante, subsistirá en los términos expresados, en tanto no sea revocada o modificada por disposición especial.

Disposición Final Única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de junio de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 22 de junio de 2001, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se convocan las Jornadas Monográficas de Estudios Superiores sobre Turismo y Gobiernos Locales, CEMO116H.10361, a celebrar en Córdoba.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca las «Jornadas Monográficas de Estudios Superiores sobre Turismo y Gobiernos Locales», organizadas por el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Granada, con el Patrocinio del IAAP y con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Fecha, lugar y horario de celebración.

Estas Jornadas se celebrarán durante los días 15 al 16 de octubre de 2001, en Córdoba, en horario de mañana y tarde, de 9,30 a 14,30 horas y de 16,30 a 19,30 horas. Las Jornadas tendrán una duración de 16 horas lectivas de presencia activa (de obligada asistencia).

La celebración efectiva de las Jornadas programadas queda supeditada a que exista un número idóneo de alumnos matriculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión.

Las Jornadas están dirigidas al personal al servicio de las Entidades que integran la Administración Local de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admitidos quienes presten servicios en la Junta de Andalucía u otras Administraciones y Entidades actuantes en el territorio de la Comunidad Autónoma y que lo hubieran solicitado.

Tercera. Criterios de selección.

El número de asistentes a las Jornadas será limitado por lo que, si es necesario, la selección de solicitantes se atenderá a los siguientes criterios:

- Puesto de trabajo desempeñado, relacionado con los temas de las jornadas.
- Prioridad en la presentación de solicitudes de asistencia.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su adjudicación discrecional a los colaboradores de ese Centro o a otras personas que presten servicio en Entidades con las que el CEMCI mantenga relaciones de colaboración.

Para que la admisión se considere firme, será requisito que el CEMCI la comunique por escrito.

Cuarta. Solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en las Jornadas que se convocan se extenderá desde la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el día 14 de septiembre de 2001.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto, al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, C.P. 18009, Granada, o bien a través de Internet, en la página Web: <http://www.cemci.org> y también podrán presentarse en cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Derechos de matrícula.

La matrícula es gratuita, por tratarse de actividades subvencionadas por el Instituto Andaluz de Administración Pública. La cancelación de matrícula deberá comunicarse por escrito al CEMCI antes del comienzo de las Jornadas.

Sexta. Puntuación.

La puntuación otorgada a esta acción formativa, de conformidad con el Decreto 36/1997, de 4 de febrero (BOJA de 15 de febrero), de la Consejería de Gobernación, será de 0,10 puntos.

Séptima. Certificado de asistencia/Diploma de Especialización.

A la finalización de las Jornadas, con una asistencia mínima del 90% del total de horas lectivas, los participantes tendrán derecho a la expedición del oportuno certificado acreditativo (16 horas).

El CEMCI podrá disponer de los sistemas de control que estime oportunos para comprobar la asistencia.

Sevilla, 22 de junio de 2001.- El Director, Joaquín Castillo Sempere.

ANEXO II

I. Contenido.

Análisis del nuevo marco normativo de la actividad turística en Andalucía tras la Ley 12/1999, de 15 de diciembre.

II. Objetivos.

1. Delimitar jurídicamente la actividad turística y relacionarla con otras normativas sectoriales (fiscal, de espectáculos, urbanística y de ordenación del territorio, etc.).

2. Conocer el marco organizativo y competencial de las distintas Administraciones Públicas actuantes, así como sus actividades de ordenación y planificación del sector turístico.

3. Estudiar los instrumentos jurídicos imprescindibles para el seguimiento y control de los diversos agentes que intervienen en la oferta y prestación de los servicios turísticos.

4. Analizar las diferentes vías para mejorar el desarrollo y promoción del sector turístico en Andalucía.

III. Destinatarios.

Las Jornadas están dirigidas al personal de las Entidades Locales, directivos o responsables políticos, así como funcionarios con habilitación de carácter nacional y todo el personal asimilado de nivel superior en áreas relacionadas con alguno de los temas objeto de las Jornadas.

IV. Avance de programa.

1. La Ley de Turismo de Andalucía:

1.1 Su entronque con el bloque de la constitucionalidad y su relación con otras Leyes sectoriales.

1.2 Competencias Autonómicas y Locales.

1.3 La Organización Administrativa del turismo.

2. La ordenación y promoción de los recursos turísticos: La planificación turística y su relación con otras planificaciones sectoriales.

3. La promoción de los recursos turísticos: Consideración especial de los signos distintivos de calidad.

4. El Municipio Turístico y la nueva realidad del Turismo Rural.

5. La fiscalidad del turismo.

6. El elemento subjetivo de la actividad turística:

6.1 Las empresas turísticas y de intermediación.

6.2 Las profesiones turísticas.

6.3 El usuario de los servicios turísticos.

7. La ordenación de los servicios y establecimientos turísticos: Clases, condiciones y requisitos.

8. La Inspección Turística: Los servicios de inspección turística y las actividades inspectoras.

9. El régimen sancionador de la actividad turística.